
Capítulo 5

Contribuir a la reconciliación

En cualquier lugar del mundo, una persona que ejerce un cargo de autoridad, y más aún si ha llegado a él por elección popular, puede, con su ejemplo, promover la convivencia pacífica o, por el contrario, incitar a la violencia en su comunidad.

Su uso del lenguaje, su comportamiento, la forma en que trata a críticos y opositores adquieren resonancia entre sus seguidores y pueden llegar a alcanzar, tanto en sentido positivo como negativo, un impacto que muy excepcionalmente pueden tener las acciones de una persona común.

En Colombia, ante la oportunidad que se nos ha dado de poner fin a más de 50 años de conflicto armado, la labor de nuestros dirigentes, y en especial la de alcaldes y gobernadores, es esencial para superar las desconfianzas, los odios heredados y las heridas que nos dejó la confrontación.

Con un conflicto cuyos efectos se han vivido especialmente en el territorio, el trabajo que los mandatarios locales deben hacer para promover el diálogo y la solución pacífica de conflictos entre los diferentes grupos que conforman su comunidad es esencial para alcanzar una sociedad reconciliada.

Trabajar en la atención y la reparación integral a las víctimas, dar oportunidades en la legalidad a quienes se reincorporan a la vida civil después de haber empuñado las armas, promover la inclusión de quienes históricamente han estado al margen de las oportunidades y generar espacios de encuentro para que todos los sectores de la comunidad puedan expresar sus diferencias, libre pero respetuosamente, son algunas de las acciones que ya vienen adelantando alcaldes y gobernadores de todo el país por la reconciliación.

Los ejemplos citados en este capítulo muestran que para trabajar por la reconciliación de sus comunidades alcaldes y gobernadores han debido acercarse a esos espacios en donde se produce el contacto diario entre las personas, la familia, el colegio, el estadio, el parque, para construir allí un nuevo tipo de relaciones marcadas por el respeto y la tolerancia.

La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo (USAID) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) pusieron en marcha el Programa de Fortalecimiento Institucional para las Víctimas, para apoyar esas acciones. El programa brinda acompañamiento y apoyo técnico a un grupo priorizado de gobiernos municipales y departamentales, para que tengan las capacidades y competencias necesarias para la ejecución e implementación eficaz de la Ley de Víctimas.

En asocio con el programa, Colombia Líder valoró a los 43 entes territoriales que hicieron parte de él, con el propósito de destacar las mejores experiencias de implementación de la política de víctimas, documentarlas y difundirlas, para que otras administraciones que enfrentan realidades similares pudieran conocerlas y aprovecharlas.

Con base en este análisis, en 2016 entregó el reconocimiento Reparando desde el Territorio, que destacó los esfuerzos hechos por administraciones locales y regionales para dar una atención digna a las víctimas, ofrecerles oportunidades de trabajo, vivienda, salud y educación, entre otros, e integrarlos y hacerlos partícipes de la vida comunitaria. Un punto en común tenían los ganadores de este galardón: el hecho de reconocer a las víctimas como miembros activos de su comunidad, con mucho que ofrecer para su desarrollo.

En esta misma línea, Colombia Líder también reconoció, con el apoyo de Reconciliación Colombia, USAID y OIM, a los alcaldes y gobernadores que a través de sus acciones promovieron la reconciliación en sus territorios.

Esas acciones incluyeron programas relacionados con la recuperación de la memoria, el fomento de la cultura ciudadana, la solución pacífica de conflictos, la inclusión de grupos marginados y el apoyo al retorno de los desplazados, entre muchas otras.

Como lo muestra el ejemplo dado por los ganadores de estos reconocimientos, entender que vivimos en un país diverso y buscar que todos seamos tenidos en cuenta es el mejor camino para construir la paz.

Adicionalmente, realizamos más de 55 talleres a lo largo del país con los candidatos a ocupar los cargos de alcaldes, gobernadores, diputados concejales para el período 2016-2019 bajo el eslogan “Preparámonos para ser los mejores gobernantes... por la reconciliación y la inclusión” e hicimos parte de la iniciativa “Gobernantes y posconflicto”, con el fin de posicionar en la agenda de los nuevos mandatarios regionales y locales los temas de la reconciliación, la paz territorial y la convivencia.

5.1 Saber resolver las diferencias

La violencia sin duda fue el huésped de horror que se tomó a San Jacinto (Bolívar) durante muchos años y provocó el desplazamiento de miles de personas. El éxodo más numeroso en el municipio ocurrió en 1996. Unas 1.500 personas huyeron de Bajo Grande por cuenta de los paramilitares.

Luego de este doloroso capítulo, los desplazados han retornado a su pueblo y ahora trabajan en la reconstrucción de sus vidas, de sus formas de producción y de la cotidianidad que perdieron. Para lograrlo fue esencial un acompañamiento en el diseño del protocolo de retornos y reubicaciones, con políticas claras que tuvieran en cuenta la idiosincrasia de los retornados y se tradujeran en un programa de generación de ingresos que contemplara sus capacidades antes de surgir el hecho victimizante.

Hoy, la administración de Abraham Antonio Kamell Yaspe⁸⁶, alcalde de San Jacinto para el período 2016-2019, resalta, como uno de sus principales logros, la implementación de la Ley de Víctimas. La clave fue la participación directa de la comunidad, a través de sus líderes y organizaciones de víctimas y la participación de organismos defensores de derechos humanos, teniendo como base fundamental una política pública incluyente.

El gobierno municipal cuenta con un equipo amplio de profesionales en psicología y trabajo social que trabajan en terreno y llegan a las casas de las víctimas, para determinar sus necesidades y evaluar las consecuencias que produjo en ellos el conflicto armado, para buscar soluciones a las necesidades de cada afectado e incluirlos en los programas adelantados. Esto es comple-

86 Abraham Antonio Kamell Yaspe, alcalde de San Jacinto (Bolívar) 2016-2019, municipio finalista del Reconocimiento Reparando desde el Territorio a las Mejores Experiencias del Programa de Fortalecimiento Institucional para las Víctimas, en la categoría de municipios.

mentado por un sistema de verificación en línea, en el que los funcionarios del orden municipal constatan los predios reclamados, para determinar si son beneficiarios de la exoneración del pago de impuesto predial a terrenos restituidos que promovió el Comité Territorial de Justicia Transicional.

“No hay camino para la paz, la paz es el camino. Paz en la casa, paz en la calle, paz en nuestros corazones” es el lema de los pobladores de San Jacinto.

En el plan de desarrollo del alcalde Abraham Kamell también se incluyó la Cátedra de Paz. La alcaldía considera que, en forma simultánea con esta cátedra, los centros educativos deben reactivar el trabajo de las escuelas y las asociaciones de padres de familia, con la perspectiva de capacitarlos para que estos reconstruyan valores que aporten a la convivencia pacífica y la reconstrucción del tejido social. Además, la administración del municipio trabaja en la creación de una estrategia para que los niños y adolescentes, conozcan y retomen su propia cultura, como las danzas, los cantos, la artesanía y la construcción de instrumentos musicales.

“La reivindicación de las víctimas debe ser dignificada con proyectos que repongan en parte lo que perdieron cuando se desplazaron”, son las palabras del mandatario, quien tiene como eje central de su política pública recuperar valores y potenciar las herencias ancestrales para olvidar los desastres de la guerra.

En materia de fortalecimiento institucional, la alcaldía adecuó un punto de atención, dotado con equipos de cómputo adecuados, acceso a internet de alta velocidad, con un grupo de trabajo amplio y un coordinador capacitado en todos los temas concernientes a víctimas, capaz de solventar o solucionar cualquier situación, por muy compleja, con un enlace municipal de víctimas.

Actualmente se ejecutan tres proyectos para víctimas del conflicto armado interno, que benefician a 135 familias (40 con proyectos de maíz, 50 de gallinas ponedoras y 45 de cerdo de engorde).

Todas estas acciones están acordes a lo plasmado en su plan de desarrollo 2016-2019 “San Jacinto adelante, gestión orientada a resultados”.

5.2 La ilusión de retornar

Los habitantes de San Carlos (Antioquia), municipio al que los ataques de todos los actores armados hicieron prácticamente desaparecer, comenzaron a volver a sus casas en la primera década de este siglo.

No esperaron a que existieran conceptos favorables de seguridad ni acompañamiento de las autoridades. Su valentía y sus ganas de recuperar lo que habían perdido para seguir adelante fueron suficientes.

María Patricia Giraldo Ramírez⁸⁷, que también fue víctima, era la persona del municipio cuando eso estaba sucediendo. Su labor de acompañamiento a este retorno hizo que muchos de los habitantes de la población le propusieran lanzarse a la alcaldía. “La gente me decía: ‘Usted puede continuar con esto’”, recuerda.

La alcaldesa Giraldo, que ocupó el cargo entre 2012 y 2015, hizo una alcaldía orientada a darle a la gente de San Carlos “dignidad en el retorno”. Para ese momento, casi el 80 % de los 25.000 habitantes de la población se habían desplazado, es decir, unos 20.000. Hoy en día ya han retornado unos 14.500.

Pero volver no era suficiente. Para que los habitantes de San Carlos pudieran vivir en su tierra en condiciones de dignidad fue necesario poner en marcha programas de vivienda, reconstruir las carreteras, incluirlos en los procesos de restitución de tierras y darles oportunidades de trabajar de nuevo en el campo.

Y no todas las necesidades eran materiales. Rescatar la memoria de lo ocurrido, promover la participación de las víctimas en los asuntos del municipio y recuperar la confianza de los sancarlitanos en la Fuerza Pública era esencial para volver a construir una verdadera comunidad.

“Si hay voluntad, las cosas se pueden hacer. Aunque ellos tenían la voluntad de retornar, si en las autoridades no hubiera habido voluntad, no se habría podido hacer”, explica.

87 María Patricia Giraldo Ramírez, alcaldesa de San Carlos (Antioquia) 2012-2015, ganadora del Reconocimiento a los Mejores Gobernantes en Reconciliación, en la categoría de municipios entre 10.001 y 20.000 habitantes.

Gracias a este esfuerzo, San Carlos se convirtió en un ejemplo de retorno exitoso y de atención integral a las víctimas.

“A uno a veces se le achocolatan los ojos al recordar, pero aprendimos que se puede tener esperanza. Si bien perdimos familiares, amigos y vecinos, nos dimos cuenta de que siempre hay posibilidades de salir adelante”, concluye.

Se realizó una reparación transformadora del territorio porque además de llevar a las personas al sitio de donde habían sido desplazadas, se generó una transformación: se reconstruyeron puentes, vías, escuelas, casetas comunales; se volvió a sembrar la tierra. Pero, sobre todo, se les pudo brindar la seguridad y la tranquilidad que necesitaban las familias que retornaron a su territorio.

Señala la alcaldesa: “Donde antes estaba sembrado de minas había presencia de los grupos armados ilegales, ocurrían los actos de victimización, los homicidios y los desplazamientos, allí llevamos con todo el equipo de la administración municipal a las familias de manera digna a sus veredas, lo que les permitió reconstruir su proyecto de vida”.

Estas familias pudieron volver a poner a funcionar sus fincas, se volvió a la dinámica propia de las veredas alrededor de las casetas comunales, se hizo la reapertura de la escuela. Sin duda, estos son hechos transformadores para un territorio con la historia que tiene San Carlos. “Hemos marcado una huella supremamente esperanzadora para nuestros ciudadanos y para las futuras generaciones”, puntualiza la alcaldesa María Patricia Giraldo.

5.3 La responsabilidad compartida frente al retorno: los casos de Medellín, Envigado y Cali

Pero este proceso de retorno no hubiera sido posible sin el apoyo de la alcaldía de Medellín, ciudad en la que se encontraban buena parte de los sancarlitanos desplazados.

Alonso Salazar Jaramillo, alcalde en la época en que empezó el proceso, entendió que el retorno no era solo un problema de San Carlos y apoyó un proyecto piloto, dirigido a 300 familias interesadas en retornar, para respaldar su esfuerzo. Además de las alcaldías de Medellín y San Carlos, el proyecto tuvo el apoyo de Proantioquia y Empresas Públicas de Medellín (EPM).

“Lo que pretendemos es que regresen a sus hogares de manera digna y mejoren su economía. No es que queramos echarlos de Medellín, pero ellos merecen retornar”, manifestó en esa oportunidad el alcalde Salazar.

La alcaldía de Medellín y EPM apoyaron con recursos el proceso que incluía oferta de vivienda digna para quienes retornaban, acompañamiento psicosocial, oportunidades productivas y acciones de reparación simbólica y reconstrucción de la memoria.

No importaba que estas inversiones no se concretaran en obras que estuvieran ubicadas físicamente en Medellín. Era parte del compromiso de la ciudad con el entorno de su departamento.

Y con este ejemplo, la ciudad continuó apoyando el retorno de personas desplazadas a todo el oriente antioqueño, incluidos municipios como San Rafael, Granada, San Luis, San Francisco y Cocorná.

Para el caso concreto de San Carlos, se firmó una alianza entre su alcaldía y la de Medellín, bajo la administración de Aníbal Gaviria, quien mantuvo la política que había diseñado Alonso Salazar, con el objetivo de garantizar un retorno digno a 134 familias que voluntariamente manifestaron a la alcaldía de Medellín su deseo de retornar dignamente y recuperar su vida de antes. Como parte del proyecto, en el que también tomó parte EPM, se entregaron a las familias unas viviendas llamadas Aldeas (casas tipo cabañas), ayuda humanitaria, proyectos productivos y de generación de ingresos, y ayuda psicosocial. “Prácticamente se les brindó un kit completo para que pudieran sobrevivir y de una u otra forma recuperar su vida de antes, que pudiesen tener nuevamente sus cultivos, sus animalitos, etc.”, señala la alcaldesa de San Carlos, María Patricia Giraldo.

Envigado (Antioquia) vivió una situación similar a la de Medellín. Es lo que se conoce técnicamente como un municipio receptor de desplazados, más que expulsor. Es decir, en los últimos años llegaron allí más personas huyendo de la violencia que las que lo abandonaron.

En su mayoría, venían buscando refugio de municipios del oriente antioqueño, como San Carlos, San Francisco, El Santuario, San Rafael, Apartadó o Sonsón, en donde los enfrentamientos entre grupos armados ilegales provocaron el éxodo de buena parte de la población.

“Muchos alcaldes les sacaban el cuerpo a las víctimas porque pensaban que primero hay que trabajar por nuestra gente, que para qué trabajar por los foráneos.

Pero es una cuestión humanitaria”, explica Héctor Londoño Restrepo⁸⁸, quien gobernó el municipio entre 2012 y 2015 y fue finalista del Reconocimiento a los Mejores Gobernantes en Reconciliación que otorga Colombia Líder.

Sin descuidar a la población tradicional de Envigado, su administración ofreció apoyo a las víctimas que llegaron a su municipio, tanto para las que querían regresar a su tierra como para las que se querían quedar.

Para quienes prefirieron quedarse, hubo apoyo psicológico y económico, oportunidades de educación y subsidios para adquirir vivienda, mientras que a quienes retornaron se les dieron aportes para recuperar sus casas y poder cultivar sus tierras.

De manera conjunta con los municipios de los que habían huido los desplazados, se realizaron actividades para recuperar la memoria, impulsar proyectos productivos y, en general, mejorar las condiciones de vida de las víctimas. El argumento de que se estaba trabajando por la población de otros municipios, por fortuna, no convenció a la gente.

“Ver la alegría de estas personas retornando a sus municipios, sabiendo que volvían a su terruño, es algo que lo llena a uno de satisfacción. Lo mismo que los que lograron reconstruir su vida en Envigado. Esa es la compensación más grande –dice el alcalde Londoño, quien destaca la solidaridad de los habitantes de su municipio–. Nunca se vio rechazo a esta población”.

El retorno de estas familias a sus tradiciones y costumbres fue el resultado del buen desarrollo de las mesas de participación municipal, en las que las víctimas del conflicto armado, incluidos representantes de sus organizaciones y grupos de defensa de sus derechos, pudieron definir, con el acompañamiento de la Personería Municipal, sus planes de trabajo y de acción, presentar informes para el Concejo Municipal y el Comité Territorial de Justicia Transicional y elegir sus representantes de participación ciudadana y consejeros para el territorio local de planeación y de participación ciudadana y discapacidad, entre otros.

El retorno de los indígenas embera que estaban desplazados en Cali, en mayo de 2015, durante la administración del alcalde Rodrigo Guerrero Velasco⁸⁹, muestra el esfuerzo conjunto que es necesario para llevar a cabo este tipo de procesos.

88 Héctor Londoño Restrepo, alcalde de Envigado (Antioquia) 2012-2015, finalista del Reconocimiento a los Mejores Gobernantes en Reconciliación, en la categoría de municipios de más de 100.001 habitantes.

89 Rodrigo Guerrero Velasco, alcalde de Santiago de Cali (Valle del Cauca) 2012-2015, ganador del Reconocimiento a los Mejores Gobernantes en Reconciliación, en la categoría de ciudades capitales.

Paulatinamente, 210 miembros de la comunidad fueron llegando a la ciudad, desde 2012, procedentes de Pueblo Rico (Risaralda), de donde tuvieron que huir a causa de la pobreza y la violencia. Aunque la ciudad les brindó atención humanitaria, sus condiciones de vida eran lamentables, vivían de la mendicidad o de la venta de artesanías, hacinados en inquilinatos y perdiendo día a día los elementos propios de su cultura.

El día anterior a su retorno, los indígenas se despidieron de Cali con sus rituales, cantos y danzas. Ahí comenzó una compleja operación logística para llevarlos de nuevo a sus resguardos. En palabras del alcalde, “durante el proceso de regreso se elaboró un plan de acompañamiento permanente en salud para la población, pusimos en funcionamiento un Centro de Desarrollo Infantil (CDI), para atender a los niños con un enfoque diferencial, e incluso se dispuso de profesores que dominaran la lengua embera en las instituciones educativas adonde asistían los jóvenes”.

Cali, que lideró el proceso, aportó recursos para que los indígenas pudieran construir viviendas definitivas en su lugar de destino; el gobierno, a través de la Unidad para las Víctimas, entregó los materiales para la construcción, y la alcaldía de Pueblo Rico y la gobernación de Risaralda se responsabilizaron de adecuar los caminos comunales, los puentes, las instituciones educativas y los puestos de salud para atender a la comunidad.

Garantizar el retorno no era suficiente; era necesario dar condiciones a las familias retornadas para que pudieran rehacer su vida en sus comunidades. Así dijo el alcalde en su momento:

“Como municipio tenemos claras nuestras responsabilidades y vamos a hacer lo mejor posible por cumplirlas, pero no lo vamos a poder hacer solos. Estamos demandado un esfuerzo de coordinación con autoridades regionales para prevenir y atender el desplazamiento en los lugares de origen para que la única alternativa de las víctimas no siga siendo desplazarse hacia a Cali”.

Los indígenas embera-katío emprendieron el regreso a su tierra el 5 de mayo de 2015, a eso de las 7:30 de la noche, en cinco buses. Los seguían cinco camiones cargados de enseres domésticos.

El caso de los embera-katio es apenas una muestra del fenómeno de desplazamiento que afecta a Cali desde comienzos del conflicto armado, pero que se incrementó a finales de los años 1990 debido a la llegada de grupos paramilitares al Valle del Cauca, Cauca y Nariño. Por eso y como resultado del crecimiento del fenómeno, la administración municipal dispuso dos oficinas de atención a desplazados en el Terminal de Buses y en el Distrito de Aguablanca. En estos lugares se pusieron en funcionamiento dos Puntos de Información y Orientación, conocidos como PIOs. Allí, las personas pueden realizar consultas sobre el avance de sus gestiones ante la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. También se informan sobre qué tipo de documentos deben tener para vincular a su núcleo familiar al sistema de salud y educación, obtener citas y ser remitidos al hogar de paso.

5.4 Oportunidades para las víctimas

Ciénaga (Magdalena) fue una de las poblaciones de la región caribe más afectadas por el conflicto armado. Más de 20.000 personas están registradas como víctimas en el municipio, en su mayoría a causa de ataques paramilitares de finales de los años noventa y comienzos de este siglo.

Veinte años después, Ciénaga es, en cambio, un ejemplo de la transformación que se produce en una comunidad cuando se cumple con la atención y reparación integral a las víctimas y la restitución de tierras que ordena la ley.

En La Secreta, una de las cuatro veredas de este municipio, en donde los paramilitares asesinaron a 20 personas en 1998, se ven ya los resultados del trabajo conjunto de varias entidades del orden nacional, la alcaldía municipal y las agencias de cooperación internacional.

Más de 500 hectáreas han sido entregadas en fallos de restitución de tierras a favor de 300 personas. Las víctimas beneficiarias se organizaron en la Asociación de Agricultores Orgánicos de La Secreta (Agrosec) y hoy en día exportan café a varios países y están incursionando en otros productos, como la miel de abejas.

Edgardo de Jesús Pérez Díaz⁹⁰, actual alcalde de Ciénaga (Magdalena), municipio que obtuvo el reconocimiento Reparando desde el Territorio por el respaldo que

90 Edgardo de Jesús Pérez Díaz, alcalde de Ciénaga (Magdalena) 2016-2019, municipio ganador del Reconocimiento Reparando desde el Territorio a las Mejores Experiencias del Programa de Fortalecimiento Institucional para las Víctimas, en la categoría de municipios.

la administración municipal ha dado a este proceso y en general a la atención y reparación a las víctimas en el municipio. Al recibirlo manifestó:

“Es una disposición que el gobierno local tiene para hacer una atención integral y poder pasar de esa atención a convertir a las víctimas de Ciénaga en actores ideales para la transformación de este país. Y qué mejor que las víctimas que las personas que fueron arrasadas por la guerra se conviertan en actores de la nueva Ciénaga, del nuevo Caribe, de la nueva Colombia que queremos”.

Y agregó: “Lo más importante ha sido poder escucharlos, poder entender sus lágrimas, sus llamados y movernos en la dirección de cumplirlos. Víctima se escribe con la V de valiente. Llegó el momento de superar el espíritu de dolor y hacer un espíritu propositivo”.

Por eso los programas que desarrolla la administración tienen énfasis en fomentar el liderazgo y la participación de las víctimas en la construcción de las políticas públicas del municipio, en la formulación del plan de desarrollo y del plan de ordenamiento territorial y así convertirlas en agentes de la transformación, es decir, en verdaderos agentes de cambio.

“¿Quién mejor que ellos para hablar de territorio, de las circunstancias que los llevaron a desplazarse y a ocupar tierras que no les pertenecían?”, afirma el mandatario local.

En este sentido, la Mesa de Participación Efectiva de las Víctimas, representada por 15 organizaciones de víctimas, se ha convertido en Ciénaga en un espacio vital para el proceso de planeación estratégica. Allí se han debatido, además del tema de víctimas, aspectos presupuestales del plan de desarrollo y las políticas del posconflicto. Así mismo, es el punto de encuentro para la integración que busca la administración municipal.

Con recursos de regalías, el municipio ha realizado la reparación integral de víctimas de Cerro Azul y La Secreta, las cuales fueron reconocidas como sujetos de reparación colectiva. Allí se viene realizando la adecuación y dotación de infraestructura social y comunitaria.

“También ha realizado el diseño y la implementación de programas y proyectos productivos para la generación de ingresos, en los casos

de reparación colectiva. En esas mismas comunidades se ejecutan proyectos para desarrollar programas recreativos y deportivos y crear procesos que permitan fortalecer el autocuidado de las comunidades. Igualmente, les han entregado capital semilla para el establecimiento de unidades productivas y, de esa manera, fortalecer la generación de ingresos en la población en proceso de reintegración y hacerla sostenible, para que las familias permanezcan en la legalidad. En forma paralela, la administración municipal apoya la vinculación laboral de las personas en proceso de reintegración y sus familias en el sector público y en las empresas privadas que tienen sus sedes o sitios de trabajo en Ciénaga”.⁹¹

El fortalecimiento de las asociaciones de víctimas para el desarrollo de proyectos productivos, el acompañamiento a la mesa de víctimas, las jornadas de atención integral y la elaboración de un plan de atención a la población desplazada son otras de las estrategias que estableció la administración de Ciénaga para brindarles oportunidades a las víctimas.

En Samaná (Caldas) se está dando una transformación similar. A finales de la década pasada, el corregimiento de San Diego, de este municipio, estaba completamente aislado a causa del conflicto armado.

“Por la violencia, los recursos no llegaban. El corregimiento se fue quedando estancado en el tiempo”, explica Wilder Iberson Escobar Ortiz⁹², alcalde de Samaná entre 2012 y 2015. El lugar era sede de enfrentamientos entre el Frente Ómar Isaza, de los paramilitares, y el Bloque 47, de las Farc.

Un proyecto clave para la comunidad, hecho con la ayuda de muchas manos, sería el que finalmente lograría revitalizarlo.

“Aunque su principal actividad era la ganadería, el corregimiento no tenía una plaza de ferias”, relata el gobernante. Para construirla, la alcaldía utilizó los recursos que la Unidad para las Víctimas asigna a través del sistema de cofinanciación.

91 Alcaldía de Ciénaga (Magdalena), postulación al Reconocimiento Reparando desde el Territorio a las Mejores Experiencias en el Programa de Fortalecimiento Institucional para las Víctimas 2016.

92 Wilder Iberson Escobar Ortiz, alcalde de Samaná (Caldas) 2012-2015, finalista del Reconocimiento a los Mejores Gobernantes en Reconciliación, en la categoría de municipios entre 20.001 y 100.000 habitantes.

“La alcaldía puso el maestro de obra; la Unidad, los recursos para los materiales (unos 50 o 60 millones de pesos) y la comunidad, la mano de obra”, cuenta. Finalmente, se logró sacar adelante la obra, necesaria para el corregimiento, y eso ayudó a recuperar la confianza de la comunidad en sus instituciones.

Trabajar por las víctimas, en Samaná, era trabajar por toda la población. En este municipio, el más golpeado por la violencia en el departamento de Caldas, de sus 25.700 habitantes, 24.000 son víctimas.

Cuando Wilder Escobar llegó a su cargo, la seguridad ya se había estabilizado, pero la desconexión entre sus habitantes y las instituciones permanecía. Samaná es el municipio con la mayor extensión del departamento y el 80 % de su territorio es rural. Tiene 170 veredas y cuatro corregimientos.

“Nos llevábamos la alcaldía para las veredas y les prestábamos servicios por tres días. Lo más interesante de esa experiencia es que solucionábamos problemas reales en tiempo real”, dice.

De esta manera, y a través del programa “Asistiendo y atendiendo a víctimas del conflicto armado interno”, la alcaldía de Samaná se propuso lograr la atención integral a todas las víctimas del conflicto armado interno garantizando su adecuada vinculación en todos los programas del nivel nacional y territorial con el fin de aportar a la reparación integral a la que tienen derecho.

Además, se desarrolló el plan de acción territorial de atención y reparación a las víctimas abarcando la mayoría de los programas desarrollados en el plan de desarrollo municipal del alcalde Escobar, lo que permitió que un gran número de personas víctimas participaran de todos los programas desarrollados por la entidad territorial, así como de los programas sociales de atención a esta población.

Florencia (Caquetá), bajo la administración del alcalde Andrés Mauricio Perdomo Lara⁹³ (2016-2019), es un ejemplo de cómo las autoridades locales pueden articularse en su interior y con los demás niveles de gobierno para atender adecuadamente a las víctimas y brindarles oportunidades. Esto hizo posible que la alcaldía obtuviera el Reconocimiento Reparando desde el Territorio, entregado por Colombia Líder, USAID y OIM.

93 Andrés Mauricio Perdomo Lara, alcalde de Florencia (Caquetá) 2016-2019, municipio ganador del Reconocimiento Reparando desde el Territorio a las Mejores Experiencias del Programa de Fortalecimiento Institucional para las Víctimas, en la categoría de ciudades capitales.

Florencia tiene uno de los más altos índices de víctimas del conflicto armado: 136.000 personas, aproximadamente, que corresponden al 60 % de su población, pero, de alguna manera, todos sus habitantes han sido afectados por el conflicto.

La magnitud del reto exigía una administración comprometida en su conjunto con la atención a las víctimas, de modo que el alcalde designó una Unidad Técnica, conformada por un profesional de cada secretaría de su despacho, que debía encargarse de dar respuesta oportuna y eficiente a los requerimientos de la población.

Esta articulación también incluye una coordinación con las entidades del orden nacional, que ha permitido, entre otras, que la capital de Caquetá cuente con profesionales especializados en materia de asuntos étnicos y la creación de una oficina de la mujer, un consejo de juventud y oficinas para las personas mayores y la población LGBTI, que dan atención a las víctimas con enfoque diferenciales.

La administración diseñó una estrategia integral que, sin desconocer la atención de necesidades urgentes, está orientada a provocar transformaciones de fondo, provocando en las víctimas un cambio de mentalidad, que les permita asumirse como sujetos con derechos y deberes, capaces de iniciar proyectos de emprendimiento que les aporten a ellos, a la ciudad y a sus familias. Esta estrategia busca incidir también en el índice de informalidad de la ciudad, que llega al 64,4 % y promover alternativas de empleo, ya que en Florencia el mayor empleador es el sector público.

La estrategia también incluye la oferta de soluciones de vivienda y de espacios para la realización de actividades culturales, así como la reconstrucción de los lazos familiares, que fueron afectados por el conflicto, especialmente para proteger a los niños, que en algunos casos han tenido que crecer en familias rotas o que perdieron a sus principales miembros.

“Cuando uno recorre las calles de Florencia y ve tantas tragedias en distintas familias, se da cuenta de que esas familias son la mayoría de los florencianos. Esa es la mayor motivación”, manifestó el alcalde Perdomo.

Para hacer sostenibles los proyectos con las víctimas, la administración fortaleció la Secretaría de Inclusión y Reconciliación, encargada de liderar y articular las políticas dirigidas a la población vulnerable y de garantizar que las víctimas se involucren y ejerzan liderazgos que contribuyan a transformar a la ciudad.